

Crece como espuma oposición al gasoducto

Si resulta como pinta y el gobierno sigue empeñado con impulsarlo, todo parece indicar que una fuerza nacional se va configurando con firmeza para dar la batalla en cualquier frente contra el gasoducto.

Perla Franco/CLARIDAD
pfranco@claridadpuertorico.com

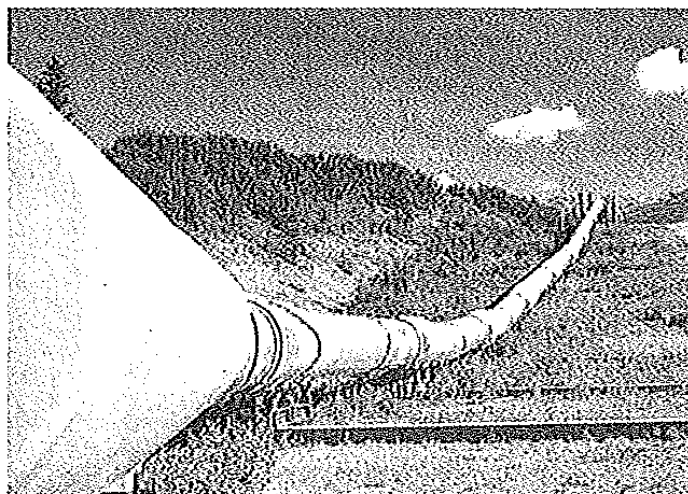
Mientras el gobierno de Puerto Rico, a través de la Autoridad de Energía Eléctrica, sigue tratando de distraer a la ciudadanía con las supuestas bondades, principalmente económicas, del gasoducto; los grupos opositores a ese proyecto discuten la esencia de lo que debería ser esa discusión: la transición de petróleo a gas natural camino a un uso cada vez mayor de energías renovables y un plan a mediano y largo plazo en esa dirección. Y aunque la AEE dice que el gasoducto lo llamaron "Vía Verde" porque es un proceso de transición hacia energías renovables, lo que realmente hace es, por un lado, pasar de la actual dependencia de petróleo a la del gas, ambos combustibles fósiles no existentes en la Isla; mientras por el otro pone en manos privadas la energía renovable sin un plan estructurado de cuándo ésta será parte también de la política del gobierno a través de la agencia pública responsable de proveer la energía eléctrica al país: la AEE.

Análisis de noticia

La AEE ha querido impulsar el proyecto del gasoducto sosteniendo que el gas natural es mejor para el ambiente que el petróleo y que tiene un costo menor. En esas dos premisas coincide la mayoría los opositores al gasoducto. Sin embargo, han sido precisamente esos opositores los que han estudiado y esbozado con argumentos concretos que el problema no está en el uso del gas a manera de transición hacia fuentes renovables, sino en cómo se quiere sustituir el petróleo con otro combustible fósil, el gas, que aunque más limpio sigue siendo uno contaminante.

Tampoco presenta la AEE cuál es ese plan de transición hacia energías renovables que no sea unos ocho pequeños y privados proyectos que ha aprobado hasta el momento y que en nada se vinculan a una política pública coherente y estructurada vinculada directamente a la AEE. Mucho menos habla la AEE del tiempo en el que el gas natural se irá reemplazando por energías renovables, y si ello será como parte de la empresa pública o será otra forma de ir privatizando la AEE.

Casa Pueblo y la UTIER se refieren a la utilización de las plantas generatrices del sur de la Isla para que éstas sean convertidas a gas natural sin necesidad de arrasar a Puerto Rico con una peligrosa tubería que, además de deforestar grandes porciones de nuestra naturaleza, fraccionaría terrenos ecológicamente sensibles, destruiría terrenos



agrícolas, cuerpos de agua y una porción de la zona kársica del país, para llevar energía a las plantas generatrices del norte de Puerto Rico que apenas generan el 25 por ciento de la energía que se produce en la Isla.

Además de esos argumentos, diversos grupos sociales cuestionan por qué la AEE no ha podido argumentar otra cosa que no sea una especie de libreto en el que no se contestan las preocupaciones que van surgiendo. Asuntos como, por ejemplo, cuánto realmente costará el gasoducto, la AEE lo despacha diciendo que \$450 millones. Pero ése es el costo sólo de la tubería, aunque recientemente hicieron la admisión en las vistas públicas de Bayamón de que esa cantidad podría aumentar en un cinco por ciento. Y conociendo cómo funcionan en este país las órdenes de cambio, nadie, absolutamente nadie pone en duda que esa cantidad pueda subir mucho más. Pero ya comenzado el proyecto, ¿qué puede hacer la ciudadanía? Por eso se organizan para evitar que inicie su construcción.

Nada dice tampoco la AEE sobre el acuerdo con EcoEléctrica, con el que tiene un contrato de exclusividad por 20 años para la provisión de gas natural. La propia EcoEléctrica ha reconocido no tener la capacidad para suplir lo que la AEE ha prometido con el gasoducto, que es el 71 por ciento de su generación con ese combustible para dentro de cuatro años. Tampoco la AEE ha dado a conocer el costo de "peaje" que le cobrará esa empresa privada. Ni lo que costará el mantenimiento, monitoreo y vigilancia 24 horas al día de la ruta del gasoducto. Ésos son gastos que no contempla la información suministrada por la AEE.

De otra parte, los grupos opositores han sido los que se han puesto a indagar sobre las repercusiones en materia de seguridad que podría tener el gasoducto en comunidades completas, especialmente en Levittown, donde este proyecto quedará expuesto a unas 30 mil personas. Por eso allí han nacido organizaciones, al igual que en distintos pueblos, por donde está trazada la ruta del gasoducto, dispuestos a enfrentarse al gobierno y la AEE si intenta siquiera comenzar la construcción. A ellos se han sumado alcaldes y legisladores, que aún siendo del propio partido en el gobierno reconocen que ese proyecto es un error. Ése es el caso de los alcaldes de Adjuntas, Arecibo y de la alcaldesa de Ponce; además de legisladores como Larry Seilhamer Rodríguez, quien junto a su colega Antonio Fas Alzamora, del Partido Popular Democrático, escucharon de la propia EcoEléctrica su incapacidad para cumplir con lo que ha prometido el gobierno.

No hay duda alguna de que las pasiones que ha levantado este proyecto va dejando un balance, por mucho, de una mayoría opuesta a su construcción. También va dejando a su paso propuestas seriamente estudiadas y consultadas con expertos en cada una de sus áreas, que han puesto en ridículo la Declaración de Impacto Ambiental Preliminar que presentó la AEE a la Junta de Calidad Ambiental (JCA). Ése es el caso de la Sección Ambiental de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, quienes catalogaron esa DIA como una que viola la legislación ambiental vigente en Puerto Rico. Pero sus deficiencias en general son crasas, aseguraron en un extenso documento en el

que evaluaron la DIA que reseñamos en esta edición.

Igual lo ha hecho la UTIER con una evaluación que merecería la pena que la AEE pondere, ya que éstos son precisamente los trabajadores de esa agencia que han visto cómo su salud se ha visto comprometida con el trabajo en las plantas generatrices. Ese sindicato ha estado dispuesto a fortalecer esa empresa para beneficio del pueblo porque su visión es una en la que plantean que la energía es un bien social y no para que unos pocos se aprovechen económicamente de ella.

También ha hecho lo propio el Frente Amplio contra el Gasoducto. Esa organización logró detener la construcción del gasoducto del sur y cuestionan incluso que el gas natural sea un combustible más limpio argumentando que cómo una mezcla de hidrocarburos compuesta principalmente de metano en una concentración de entre 90% y 95%, dependiendo de dónde se extrae y por desconocer quién será el proveedor del gas natural que se utilice en Puerto Rico, aducen que se desconoce la composición final que tendrá ese combustible. Por ello han insistido en que si el objetivo es, como alega la AEE, reducir la emanación de carbono al ambiente "entonces deben considerar alternativas de energía renovable". También se han referido a que la vulnerabilidad del gasoducto, que por el tramo tan largo por el que transcurriría, de verse afectado un una de sus partes dejaría sin luz a toda la Isla. Las razones de posibles explosiones han sido su mayor oposición y en ellas se sostienen para catalogarlo como "el tubo de la muerte".

Y así por el estilo, cada vez más grupos comunitarios se organizan para oponerse al gasoducto. Gente sencilla y humilde que va formando comunidades enteras de opositores dispuestos a defender a los suyos. Muchos de ellos desfilaron en las vistas públicas que ofreció la JCA el pasado sábado y de las cuales la mayoría estuvo convencida de que fueron por forma. Y aunque en nada confían que vaya a cuestionar un proyecto que impulsa el propio Gobernador, casi suplicaron que evalúe el impacto real que tendrá este proyecto en la vida de todos los puertorriqueños. A eso parecieron contestar las agencias concernientes que no perdieron tiempo en favorecer este proyecto y de paso aprovecharon para elogiar a su jefe político, el Gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño. Pero si resulta como pinta y el gobierno sigue empeñado con impulsarlo, todo parece indicar que una fuerza nacional se va configurando con firmeza para dar la batalla en cualquier frente contra el gasoducto.